



La organización y resistencia de los trabajadores en el marco de la pandemia

Desde el inicio del ASPO la conflictividad laboral fue incrementando su intensidad al tiempo que los problemas de los y las trabajadoras se fueron agravando. Si en un comienzo las acciones giraron en torno a medidas de baja intensidad, como denuncias y acciones comunicacionales, poco a poco, frente a los incumplimientos patronales empezaron a proliferar paros, acampes, protestas, movilizaciones y piquetes. Asimismo, a las demandas por medidas de protección de la salud y para enfrentar despidos o descuentos salariales se sumaron, en los últimos meses, los pedidos de recomposición salarial.

Estos conflictos ocurren en un marco donde la posibilidad de realizar acciones se encuentra limitada por distintos factores. Por un lado, las posibles sanciones de empleadores en un contexto de abrupta caída en los puestos de trabajo sumadas a acciones represivas que si bien no han sido generalizadas tampoco han estado ausentes. En segundo lugar, la dificultad de realizar acciones sindicales por los riesgos de potenciales contagios que surgen de aglutinar a varios trabajadores en un mismo espacio. Finalmente, la disgregación que provoca la situación de teletrabajo en distintos sectores y los trabajadores que se encuentran licenciados por ser personas de riesgo.

Aun así, las instancias de organización y resistencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales han estado presentes a lo largo del año. Algunas de ellas son sistematizadas en este informe, producto de un relevamiento de medios de prensa sindical de marzo a septiembre.

Conflictos por medidas de seguridad en el funcionamiento de actividades

Desde los primeros días de la cuarentena, los trabajadores cuyas actividades se consideraron esenciales reclamaron que se garantice el cumplimiento de protocolos, el otorgamiento de elementos de seguridad, y algunos cambios en el proceso productivo para garantizar el distanciamiento en los establecimientos. Es decir, se exigieron un conjunto de medidas para impedir la propagación del virus en los lugares de trabajo, sus familias y la sociedad en general. Las demandas se realizaron mediante solicitudes, conferencias de prensa y otros tipos de acciones comunicacionales. Pese a ello, los centros de trabajo en cadenas de supermercados, empresas de la alimentación o metalurgia fueron el epicentro de los primeros contagios y muerte.

Las autoridades públicas y los empleadores desoyeron esas demandas a la par que los contagios se extendieron en esos lugares de trabajo y también en los establecimientos que se fueron habilitando, poniendo en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y la población en general. Frente a esto, trabajadores de numerosas empresas denunciaron que sus empleadores no sólo intentaron ocultar las muertes y contagios sino también desplegaron una serie de medidas en pos de mantener en funcionamiento los establecimientos que potenciaron los riesgos de la salud del personal: incumplimiento de los protocolos, obligar a los trabajadores a concurrir pese a tener contactos estrechos, rotación del personal en las distintas sucursales, no otorgamiento de elementos de bioseguridad u otorgamiento de elementos deficientes, incremento de la

producción generando mayor concentración de trabajadores, forzar al personal a concurrir a su trabajo mediante permisos truchos.

Entre las denuncias de organizaciones de trabajadores que ocurrieron en los últimos meses vinculadas a este tipo de motivo se encuentran: más de una decena de fallecimientos de muertos y cientos de contagios en la empresa Ledesma; 600 contagios y al menos dos fallecidos en los supermercados Coto, 900 contagios en Carrefour situación que se replica en las cadenas de supermercados de la empresa Cencosud y Walmart; denuncias por contagios, fallecimientos abarrotamiento de pasajeros en Metrovías hecho que también se registra en el ferrocarril Sarmiento y la línea 60; paros en las empresas La Salteña, Página 12 y Papeleros de Lanús; denuncias en las empresas por contagios en Bambi, Toyota, Ball, Dema, MAPSA, Campo Austral, Unilever, La Gallega, Transporte Ideal San Justo, Municipalidad de Humahuaca, Motomel, Toyota, Frigolar, Bingo Oasis, Textil Elemento, Belgrano Sur, La Virginia de Rosario, Sanatorio Los Lapachos, Vía Bariloche, Mc Donald's La Plata, Tercerizados MercadoLibre, Ingenio Tabacal, Ingenio San Isidro, Banco Piano, Textil Tipiotí, entre otros.

Conflictos por la continuidad de las fuentes de trabajo y rebajas salariales

Conforme pasaron los primeros días del ASPO, se profundizaron los reclamos en relación a despidos, suspensiones e incumplimientos salariales. Si bien al comienzo de la cuarentena se podía intuir una contracción de los puestos de trabajo y recortes salariales, poco a poco los reclamos tuvieron presencia en decenas de empresas. Pese al decreto presidencial que prohibió por 60 días los despidos y las suspensiones sin causa o fundados en fuerza mayor o falta de trabajo, las situaciones de crisis se fueron generalizando.

En los primeros tres meses algunas de las denuncias sobre despidos masivos se registraron en empresas tercerizadas de seguridad (Murata, Arsec, Siseq), en actividades ligadas al transporte de pasajeros (Ersa en la provincia de Corrientes, Grin Scooters, Vía Bariloche, Terminal Salta, Ko Ko), en actividades ligadas al comercio (cadena de kioscos Mc Kio, Supermercado el Tunel, Supermax, Famacity), a la gastronomía (Gate Gourmet, Mostaza, KFC, Restaurant Oviedo, Flykitchen, Tea Connections), a la energía y construcción (YPF, Techint, Obing y Pecan, Neltec, Camiletti, Ice Ingeniería), al servicio de salud (SAME La Plata, Hospital Bariloche).

En la industria manufacturera y en las actividades ligadas al entretenimiento y la cultura se detectaron la mayor cantidad de denuncias. En el primer caso se destacan los despidos en el frigorífico Agroservice, en la empresa Danica (luego de despidos, represalias y sin acatar la conciliación obligatoria la empresa decidió cerrar sus puertas), Frigorífico Penta (cierre de la planta y despido de 240 trabajadorxs que fueron reprimidos por la policía bonaerense cuando reclamaban), Laboratorio Craveri, Lavaderos Apparel, Panificadora Pan Pan, Fachadas Integrales, Frigorífico Senillosa, Aresil, entre otras. En el segundo caso hubo denuncias por despidos en el complejo Cinemark, el Teatro Colón, la Revista Pronto (que decidió sin previo aviso cerrar), Cablevisión (GSA tercerizada de call center), Orquesta de José C Paz, Casinos Santa Fé, Teleperformance.

Más recientemente, durante los meses de agosto y septiembre se intensificaron las medidas de fuerza mediante paros, bloqueos, piquetes, acampes entre otras acciones tendientes a revertir despidos decididos por las patronales bajo distintas modalidades a fin de sortear la prohibición todavía vigente para adoptar este tipo de medidas. Esto se registró en las empresas: Siderca, Grupo Sedamil Tenaris, Grub S.A, Teleperformance, Fumiscor, GCBA (sector de limpieza e infraestructura), Gotan, Gate Gourmet, Línea de Transporte Urbano de Pasajeros N° 9 y Vía Bariloche.

Además de los despidos, algunas empresas han recurrido a otras modalidades de recortes parciales que impactan principalmente sobre el salario, recurriendo para ello a: 1) suspensiones, 2) pago de salarios en cuotas, 3) recortes salariales sin argumento o argumentando quitas por presentismo, premios de productividad etc., 4) deuda completa de los salarios.

Este tipo de medidas fueron generalizadas durante los primeros meses del ASPO pero no todavía siguen siendo una constante. Durante los meses de agosto y septiembre, los trabajadores desplegaron medidas de fuerza de alta intensidad por esas situaciones en: Diario Perfil; Expreso Argentino; Docentes de Neuquén; Docentes, personal de la administración pública y de la salud en la provincia de Chubut; Comahue; Unión Bus; Docentes del plan Fines; Colectiveros de Rosario, Santa Fe, Bariloche, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba; Municipalidad de Centenario y Glovo.

Conflictos por recomposiciones salariales

Por último, a partir de agosto empezaron a registrarse conflictos de alta y baja intensidad en reclamo de mejoras salariales, al tiempo que numerosas actividades comenzaron a renovar sus acuerdos paritarios. Entre esos conflictos se destacan: paros en la industria lechera y petrolera, y en los recibidores de granos, protestas en UATRE Tucumán, movilizaciones en comercio, asambleas en la siderurgia, movilizaciones en el sector salud en numerosas provincias, piquetes de pesqueros en Chubut; movilizaciones en la empresa Citrus, paros en Perfil y el Cronista por la reapertura de paritarias; la jornada de lucha de ATE contra el ofrecimiento del 7% de aumento por parte del Estado Nacional, paro y movilizaciones de la Conadu Histórica y paros de la Asociación Judicial Bonaerense y de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.

Conflictos por la apertura o la negativa de apertura de actividades

Otro de los ejes de las disputas fue en torno a la apertura de determinadas actividades. En las primeras semanas del ASPO estas situaciones ocurrieron con mayor presencia en las actividades industriales y en empresas de la alimentación y la metalurgia sus trabajadores reclamaron que la producción en marcha se restringa a aquellos bienes esenciales para la sociedad y para el funcionamiento del sistema de salud. El eje del debate estaba en torno a evitar el funcionamiento de líneas de producción que consideraban no esenciales y así disminuir la circulación del personal. Algunas de estas situaciones se dieron en las empresas de producción de alimentos, donde los trabajadores solicitaron no producir golosinas y en la metalurgia para que los esfuerzos destinen a los insumos para las instituciones de salud.

En los últimos meses, las tensiones por la apertura de actividades se asocian al reclamo de trabajadores que quieren reiniciar sus tareas mientras otros que vienen resistiendo. Reclamos del primer tipo fueron formulados en el sector de la construcción, donde se solicitó el reinicio de obras públicas y privadas, por los trabajadores del Turf de San Isidro, por el Sindicato de Trabajadores Caninos de CABA, y por el personal de casino de Gualeguaychu. Por el contrario, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires han impulsado distintas medidas para enfrentar al GCBA quien busca el reinicio de las clases presenciales.

Por último, se encuentra el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la economía informal, quienes no tienen otra forma de subsistir mediante la realización de "changas", venta de bienes en la vía pública, entre otras estrategias. Se trata de colectivos con una fuerte presencia de trabajadores migrantes quienes padecen represalias por parte de las fuerzas de seguridad. Entre estos estos, se registraron detenciones de vendedores y vendedoras ambulantes en los barrios de Flores y Once, el partido de San Martín, en Esteban Echeverría y en La Plata pero también de

trabajadoras sexuales, quienes vienen padeciendo persecuciones, amedrentamientos y amenazas constantes de las fuerzas de seguridad y han realizado múltiples manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires.

Conflictos en el sector salud

Finalmente, una sistematización de la conflictividad laboral durante los últimos meses requiere considerar en detalle la situación que han atravesado los trabajadores de la salud y las acciones que han impulsado incluso con anterioridad al dictado del ASPO. En efecto, las organizaciones sindicales del sector ya por entonces advertían la existencia de obstáculos y falencias en el para afrontar la pandemia. Se trata de reclamos históricos que se potencian en la situación actual. El desfinanciamiento y el desmantelamiento de la salud pública, la falta de personal, de herramientas de trabajo, el déficit en la infraestructura, la precarización contractual, los magros salarios, los obstáculos para conseguir recategorizaciones, son parte del conjunto de demandas que les trabajadores y sus organizaciones han impulsado y visibilizado a lo largo de los últimos años.

En los últimos seis meses, a ese pliego de reclamos se le sumó la necesidad de contar con elementos de bioseguridad, elementos de protección personal y licencias para el personal de riesgo o para tareas de cuidado de niños a cargo y la denuncia de contagios que ascienden como mínimo a 38.000 y el fallecimiento de al menos 160 trabajadores. En dicho marco, la FESRPOSA realizó distintas medidas de fuerza (movilizaciones, paros, cortes, asambleas, protestas y otras actividades en la vía pública) de alcance nacional y provincial en Río Negro, Chubut, CABA, Córdoba, San Juan, Ushuaia, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Chubut, Santa Fe, Santa Fe, Santa Cruz, Buenos Aires y Catamarca, incluyendo también el reclamo de una paritaria nacional de salud que fije un piso de derechos y establezca un plan nacional de desprecuarización laboral; terminar con el trabajo en negro y el pluriempleo y la duplicación del monto del bono estímulo. Por su parte, ATE salud también inicio acciones sindicales en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mendoza, Chaco, Chubut, La Pampa, contra la precarización, carrera sanitaria, mejoras salariales, entre otras demandas.

La respuesta estatal a este tipo de reclamos fue insuficiente y las acciones de reclamo continúan desarrollándose, en algunos casos a pesar de la reacción violenta por parte de las autoridades oficiales, tal como la represión por parte de la policía de la Ciudad a enfermeras y enfermeros que intentaron entregar un petitorio de demandas que incluían mayor presupuesto y mejores condiciones laborales.